

## 24ª SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE JULIO DE 1869

### PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALSINA

**SUMARIO**—El Poder Ejecutivo devuelve observada la ley de Capital—Presentación de los proyectos del señor Rojo, determinando que la promulgación de las leyes se hace por su publicación en el «Boletín Oficial», y haciendo cesar la autorización conferida al Poder Ejecutivo en 1865 para la movilización de la Guardia Nacional—Termina la consideración del proyecto de ley de ciudadanía—Se considera la minuta de contestación al Poder Ejecutivo referente á la remuneración acordada á D. Martín de Moussy.

#### Señores Senadores

Alsina  
Aráoz  
Arias  
Bazán  
Blanco  
Borges  
Bustamante  
Colodrero  
Corbalán  
Daract  
Frias  
Granel  
Ibarra  
Lobo  
Llerena  
Mitre  
Navarro  
Oroño  
Piñero  
Rojo  
Román  
Vidal  
Zavalla

En Buenos Aires, á quince de julio de mil ochocientos sesenta y nueve, reunidos en su sala de sesiones, el señor Presidente y los señores senadores inscriptos al margen; se abrió la sesión con inasistencia de los señores Dávila, Uriburu y Victorica con aviso.

No estando dispuesta el acta anterior, el Secretario procedió á la lectura de los asuntos entrados, á saber:

1º Un mensaje del Poder Ejecutivo fecha de ese día, devolviendo observado, en conformidad al artículo setenta y dos de la Constitución, el Proyecto de ley sancionado por el Congreso en 6 del corriente, designando la ciudad del Rosario para Capital de la República.

—Se destinó á la Comisión de Negocios Constitucionales.

2º Una nota del señor Presidente de la otra Cámara, fecha 14 del corriente, remitiendo á la revisión del Senado un proyecto de ley sancionado en esa fecha, por el cual se exonera de derechos, la importación de los materiales exclusivamente destinados para el establecimientos de tranvías en la República.

—A la Comisión de Hacienda.

3º Otra nota de igual procedencia y fecha, acompañando también en revisión un proyecto de ley sancionado en la misma, aprobando los decretos expedidos por el Poder Ejecutivo en 26 de octubre de 1868 y 20 de marzo de 1869, cerrando el plazo para la presentación de los créditos reconocidos por las leyes de 1º de noviembre de 1862, y 20 de octubre de 1863.

—A la Comisión de Hacienda.

Se dió cuenta de los siguientes despachos de Comisiones:

1º De la de Negocios Constitucionales, sobre el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para que el ciudadano don Felix Frias, nombrado Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de Chile, y el Brigadier General don Wenceslao Paunero nombrado en igual carácter cerca de Su Majestad el Emperador del Brasil, continúen en el ejercicio de su cargo respectivo.

2º De la de Hacienda, sobre el Proyecto de ley remitido en revisión por la otra Cámara, por el cual se destina la suma de cuatro mil pesos fuertes á la adquisición de libros para la biblioteca del Congreso.

3º De la de Peticiones, sobre los diplomas presentados por el señor Videla como Senador por San Juan, y sobre la petición de don Pascual Barbatí sobre suscripción á su obra titulada «Compendio de historia moderna».

El señor Presidente ordenó la impresión y reparto de estos despachos, para la orden del día correspondiente—(Número 19).

Dióse cuenta igualmente de una presentación de don Savino Tripote ciudadano de Italia, proponiendo un contrato de colonización sobre la costa del Río Paraná en el límite norte de la Provincia de Santa Fe.

—A la Comisión de Hacienda.

**Sr. Rojo**—Antes de entrar á la orden del día, desearía presentar á la honorable Cámara dos proyectos cuya sanción creo conveniente y aun necesaria.

Pido al señor Secretario se sirva leer alguno de ellos.

—Se leyó el que sigue.

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º—La promulgación de las leyes y decretos nacionales se hará, publicándolos en el *Boletín Oficial* que

está mandado crear con ese objeto exclusivamente, y que es servido por el ítem 1.º del inciso 7.º de la ley del presupuesto.

Art. 2º—Las leyes y decretos así publicados se reputarán auténticos, y empezarán á tener fuerza obligatoria en la ciudad en donde residan los Poderes supremos de la Nación, desde el día siguiente al de su publicación; y fuera de ella tantos días después cuantas veces siete leguas paguen hasta allí los correos Nacionales.

Art. 3º—Es lícito, sin embargo, ampararse antes de esos términos, con una ley de amnistía ó un decreto de indulto cuya existencia conste de una manera fehaciente.

Art. 4º—Tres mil ejemplares del *Boletín Oficial* serán emitidos por ahora y distribuidos inmediatamente entre las Provincias, en proporción á su representación en el Congreso.

Art. 5º—Comuníquese, etc.

Sala de Comisiones del Senado, en Buenos Aires, á 28 de junio de 1869.

*Tadeo Rojo.*

Este proyecto, á mi juicio, señor Presidente, responde á una necesidad que se hace sentir ya en la vida civil y aun política del país.

En materia de promulgación de las leyes y decretos gubernativos, creo que puede asegurarse que estamos al día siguiente de la caída de Rosas, cuando el país se gobernaba sin más publicación que la Gaceta Mercantil.

Hoy el privilegio que aquel periódico gozaba se halla repartido en todos aquellos que se publican en la residencia de las autoridades nacionales, sin que haya una sola publicación que responda de la verdad ó de la autenticidad de las leyes y decretos que han de regir la vida política y civil. Lo único que se ha hecho á este respecto es facultar al Poder Ejecutivo por la ley del presu-

puesto, para publicar un *Boletín Oficial* destinado exclusivamente á las publicaciones de leyes y decretos nacionales, autorización de que el Poder Ejecutivo no ha hecho uso.

Lo único que se ha publicado hasta ahora, es lo que se llama *El Nacional de la Semana* pero se publica lo mismo que *El Mosquito* ó como cualquiera otra hoja periódica, sin autoridad ninguna. De aquí resulta que hasta la misma justicia nacional ignora las disposiciones que á ella se refieren, como sucede hoy en Catamarca, que se está procediendo contra individuos que se encuentran favorecidos por un decreto ó indulto del Presidente de la República. Esos individuos, necesariamente han de ser perseguidos por la justicia hasta el momento en que de alguna manera se les haga saber la existencia de aquel indulto ó promesa hecha por el General Navarro á nombre del Presidente de la República.

Me parece que esto basta para demostrar la conveniencia y la necesidad de sancionar este proyecto de ley, que aun cuando él no sea completo ni satisfaga enteramente todas las necesidades, servirá por lo menos de tema para que la ilustración del Congreso perfeccione una ley sobre la materia.

Es en este sentido que pido en apoyo de ese proyecto, la opinión de mis honorables colegas.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**— Lea el señor Secretario el otro proyecto.

—Se leyó el siguiente:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º—Cesa la autorización prestada en 29 de mayo de 1865, á los decretos expedidos por el Poder Ejecutivo en 16 y 19 de abril del mismo año; movilizándolo, por el primero la guardia nacional en toda la República, y esta-

bleciendo, por el segundo cinco inspecciones de armas de la Nación.

Art. 2º—Cesa igualmente la autorización conferida al Poder Ejecutivo en 2 de junio de 1865, para formar un ejército de veinticinco mil hombres.

Art. 3º—Exceptúanse de esta disposición los cuerpos de tropa, los jefes y oficiales que actualmente revistan en el ejército de operaciones sobre el Paraguay, y los que hacen el servicio ordinario de frontera.

Art. 4º—Los cuerpos de línea que no se encuentran en uno ú otro caso de estos destinos, reemplazarán inmediatamente á otros tantos de guardia nacional, de los que allí hacen sus veces.

Art. 5º—La presente ley se considerará como complementaria, en cuanto al número y la clase de las fuerzas, de la autorización facultativa que la ley del presupuesto vigente acuerda al departamento de la guerra.

Art. 6º—Comuníquese, etc.

Sala de Comisiones del Senado, Buenos Aires, junio 28 de 1869.

*Tadeo Rojo.*

**Sr. Rojo**—Este proyecto, señor, responde también á otra necesidad de interés público y de interés económico del país. Voy á demostrarlo brevemente.

En 1865, ante el ataque brusco y violento del gobierno del Paraguay, el Presidente de la República hubo de adoptar medidas extremas para poner al país en actitud de defender el territorio y sostener el honor nacional atacado traidoramente por el gobierno del Paraguay. El Presidente de la República entonces para llenar este imperioso deber, decretó la movilización de la guardia nacional y adoptó muchas otras medidas tendentes todas al objeto de reunir en la parte del territorio que pisaba el enemigo toda la fuerza posible.

El Congreso, en las sesiones de ese año secundó esta actitud del Poder Ejecutivo, en primer lugar autorizando esa actitud que solamente en fuerza de la necesidad había podido permitirse el Presidente de la República. Nada más justificado que aquellas medidas y la autorización que el Congreso le prestó en las circunstancias que el país se encontraba. Entonces el Poder Ejecutivo y el Congreso, en su caso, hicieron bien en ocurrir á esos medios extremos, á esos remedios heroicos que la Constitución trae para salvarse así misma y para salvar al país; pero hoy, cuando la guerra ha dejado de tener las proporciones que entonces asumía, cuando la constancia, los esfuerzos y los sacrificios hechos en esta guerra se convierten en un accidente ordinario hasta cierto punto, hasta el extremo de llamar ya bien poco la atención pública; cuando el ejército del país está reducido allí á un escaso número de cuerpos probablemente descuidados ya; yo creo, señor, que corresponde para la conservación del orden público, que nosotros recojamos todas esas facultades que entonces confiamos al Poder Ejecutivo.

Hay otra razón más, señor, y de bulto para que el Congreso ponga término á ese estado indefinido ó extraordinario de cosas en el país, y es los efectos económicos que esa autorización trae consigo.

Naturalmente, quien dice movilizar guardia nacional, dice gastar renta pública, y bajo este aspecto, yo creo que pocos habrá entre los miembros del Congreso que puedan decir hasta que punto se halla hoy comprometida la renta pública con motivo de la movilización de la guardia nacional.

Es necesario, pues, poner punto final á esta especie de desorden, dire así, que trae este estado extraordinario de cosas.

Tenemos la ley del presupuesto que atiende al servicio militar de la República y que fija también la cantidad de

dinero que se ha de invertir en él. Tenemos también las leyes extraordinarias sobre la guerra á que el proyecto se refiere. Tenemos una facultación para invertir en la guerra diez millones de pesos, y otra facultación más para que el Poder Ejecutivo invierta no sé que suma de millones de pesos. Entretanto, yo no reconozco en la República sinó dos necesidades á que el Poder Ejecutivo tiene que atender por las armas en el estado actual; una es la guerra del Paraguay, que como he dicho antes, está reducida á muy poca cosa, y la otra es la frontera.

En la guerra del Paraguay vamos á tener ya un nuevo aliado, el gobierno va á establecerse allí, que por más embrionario que sea, ha de ser siempre un poderoso elemento contra el enemigo que se trata de concluir.

El servicio de la frontera es muy conocido, y hasta se sabe á punto fijo la cantidad de hombres que es necesario para cubrirlo en la forma de costumbre, es decir, para cubrir los puntos que demarca esa frontera ilusoria de la República. Así es que para cualquiera innovación que el Poder Ejecutivo piense hacer en la futura frontera, necesitará venir al Congreso á pedirle autorización para gastar lo necesario á fin de realizar su idea.

Es pues, en vista de la necesidad imperiosa que hay de que la administración del gobierno del país vuelva de una vez á su estado ordinario, que presento este proyecto, al cual creo que los señores senadores le prestarán su apoyo.

—Apoyado.

—Fué destinado á las Comisiones de Guerra y de Legislación unidas.

**Nr. Presidente**—Continúa la orden del día pendiente.

**Nr. Secretario**—Había quedado sancionado hasta el artículo 12 de la ley de

ciudadanía; pero se pidió la reconsideración del artículo 10 y fué acordada.

**Sr. Aráoz**— Después de conferenciar con muchos de los señores senadores respecto de este artículo, respecto del cual no hubo avenimiento en la opinión de la Cámara, nos hemos puesto de acuerdo en lo que va á leer el señor Secretario y que parece que ha satisfecho la opinión de todos los señores senadores que han tomado parte en la discusión.

—Leyó el siguiente:

«Artículo 1º—La pérdida de la ciudadanía argentina por la adopción de otra extraña exime de las cargas y deberes anexos á aquella.»

—Pusóse en discusión.

**Sr. Granel** — Yo creo que no hay consecuencia entre la imposición de la nacionalidad que se hace por esta ley y la latitud que se le da á esta disposición; cuando la ciudadanía se impone, se impone con todas sus consecuencias y con todos sus deberes.

Este principio de la naturalización sostenido por el derecho de gentes, tiene sus restricciones. Por ejemplo; el ciudadano de una nación naturalizado en otra, no se desprende de todas las obligaciones que la nación á que pertenece le impone por la ciudadanía de su país; pero en este caso, nunca puede hacerse efectiva la protección de la nación en cuyo país había nacido el naturalizado. Esta es una de las limitaciones impuestas á ese derecho.

Y se comprende perfectamente. Un individuo nacido en Inglaterra, por ejemplo, naturalizado en la República Argentina, es para ante todas las naciones del mundo argentino, y el gobierno argentino le debe la protección que corresponde á sus derechos en caso de que fuesen desconocidos; pero si se tratase del gobierno inglés, el gobierno ar-

gentino no le debía protección á ese individuo, porque el principio de la ciudadanía natural, consignado en la Constitución, tiene necesariamente que ser respetado como base de la ciudadanía. Así es que este individuo, es argentino para ante todas las demás naciones; pero no para ante aquella en cuyo territorio había nacido, porque eso importaría desconocer aquel principio en virtud del cual legislamos sobre ciudadanía.

Por otra parte, señor Presidente, si dejamos el artículo como lo propone ahora la Comisión, yo pregunto: si un ciudadano natural argentino, naturalizado en Inglaterra, estando la República Argentina en guerra con la nación inglesa, ¿tendría derecho de arrojar balas sobre la bandera argentina!

Si la Comisión entiende que tiene este derecho, yo encuentro que sería una contradicción del principio en virtud del cual estamos legislando y que por la Constitución estamos obligados á tomar por base al dictar la ley de ciudadanía.

A mi juicio, nosotros no debemos hacer la misma aplicación que han hecho de este principio los ingleses, los norteamericanos y los prusianos, porque estamos en muy distintas condiciones.

Un país que arroja de su seno á sus hijos porque no caben en él, está en muy distintas condiciones de aquellas en que nos encontramos nosotros, que deseamos traer de todas partes hombres que nos ayuden á llevar esta carga tan pesada que se llama ciudadanía argentina. Aplicar, pues, aquellos mismos principios á la situación en que nos encontramos, me parece un poco irreflexivo; y tanto más me parece que no debemos hacerlo, cuanto que por la Constitución tenemos el deber de legislar con arreglo al principio de la ciudadanía natural.

Por consiguiente, señor, tenemos que salvar estas dos excepciones: el argentino naturalizado en cualquiera parte

del mundo, será ciudadano de la nación que lo naturalice; pero nunca podrá reclamar la protección de la nación que lo ha naturalizado contra los actos del Gobierno Argentino ó de la República Argentina. ¿Por qué? Porque la República Argentina profesa el principio de que es ciudadano todo el que nace en su territorio; y para ser consecuente, tiene que sostener que la protección del país que lo naturalice, nunca puede ejercerse respecto de la República Argentina.

Desearía saber, pues, de la Comisión, si ella piensa de la misma manera, porque estaríamos de acuerdo, si ella entiende que el artículo no importa el desconocimiento absoluto del principio de la ciudadanía natural en los casos á que me he referido.

**Sr. Aráoz**—Parece que el artículo á que se refiere el señor Senador está bien claro, y podía volverse á leer, para que el señor Senador, que realmente es uno de los pocos que ha tomado parte en su confección, pueda comprenderlo mejor; pero prescindiendo de esto, debo observarle al señor Senador, que ese principio de la ciudadanía natural que invoca como la base única que debe servir á esta ley, no es absoluto, ni en la ley ni en la Constitución Nacional, que es la ley suprema del país.

La Constitución no establece de una manera exclusiva el principio de la ciudadanía natural ó de la tierra; admite, precisamente para el ejercicio de los más grandes derechos políticos, la ciudadanía de origen, y acuerda á estos ciudadanos el derecho de ser presidentes de la República. De manera que el hijo de un ciudadano nativo nacido en Chile, en el Perú ó en Inglaterra, puede ser Presidente de la República.

Véase, pues, como el principio que invoca el señor Senador no es absoluto. Por consiguiente, lo que hacemos nosotros por este artículo, está perfectamente de acuerdo con la Constitución, que nosotros no podemos modificar para

establecer ese absolutismo completo que quiere el señor Senador.

Las naciones más adelantadas de la tierra, por nuevos pactos internacionales, han tenido que modificar el principio que invoca al señor Senador. La Inglaterra misma, que es el testimonio más alto en materia de tirantez y absolutismo en cuanto al principio de los derechos de la tierra, acaba de modificarlo en su tratado con Norte América.

Norte América misma ha modificado sus leyes, como lo ha manifestado más de un Senador y el señor Ministro del Interior, leyendo extensamente la obra del señor Calvo, en la cual están consignados esos tratados. Y nosotros, que no estamos á la altura de la Inglaterra, ni de Norte América, ni de la Prusia, no podemos menos que aceptar los principios á que esas naciones están sometidas.

El derecho antiguo, por otra parte, estaba fundado más bien que en los principios de la ciencia, en el poder material de sus armas. Como la Inglaterra podía pasear su bandera por todos los mares, hacía respetar sus ciudadanos en todas partes como ella lo entendía; pero nosotros no podemos hacer innovaciones tan perentorias que vengan á restringir los principios aceptados por todo el mundo.

Viniendo ahora al caso práctico, voy á responder á una de las objeciones que ha hecho el señor Senador.

Yo le pregunto: un hijo de argentino nacido en Chile viene á la República Argentina, se prevale de esta disposición y se hace ciudadano argentino. Pasados algunos años vuelve á Chile, se hace ciudadano chileno, y declarándose una guerra entre ambos Estados, toma las armas contra la República Argentina. ¿No se ven todos los males que pueden resultar de tal disposición? Esto prueba que no debemos sentar este principio tan absoluto. El principio es no violentar á un ciudadano de la República Argentina, á que nunca deje la ciudadanía de la patria argentina.

Pienso, pues, que el artículo responde mejor á las necesidades á que tratamos de atender.

**Sr. Piñero**—Que se lea el artículo.

**Sr. Rojo**—Iba á pedir lo mismo.

—Se leyó.

**Sr. Granel**—Los argumentos aducidos por el miembro informante de la Comisión, parece que han querido satisfacer mis propósitos y deseos en el presente caso. El ha aplicado las excepciones que la Constitución determina á principios generales que establecen la ciudadanía natural, pero de ninguna manera tienen aplicación á una ley de esta naturaleza, en la cual la Constitución ha querido terminante y expresamente que la ley se haga con sujeción á los principios de la ciudadanía natural, y lo dice así en el inciso undécimo del artículo 67, que entre las atribuciones del Congreso establece esta disposición.

—Leyó.

Quiere decir que esta ley no puede ser dictada de otra manera.

Yo había hecho á la Comisión dos preguntas, presentando los casos en que quería que aplicase el principio que profesaba; pero el señor miembro informante faltando á las reglas que en estos casos deberíamos observar para poderlos entender, no ha contestado á mis preguntas, sino que me ha dirigido otras á las que no puedo contestar porque no soy el autor del proyecto. Yo he preguntado de qué manera se entiende la aplicación de esta ley en los casos que digo y el señor Senador me pregunta: ¿De qué manera lo entiende usted?

Yo estoy procurando penetrar el sentido y propósitos de la Comisión, para saber si es aceptable ó no la ley. Si está ó no de acuerdo con la ciudadanía natural, y para ello necesito saber cuál es la mente de la Comisión; si entien-

de que la nación que naturaliza á un ciudadano argentino tiene el derecho de reclamarlo. Encontramos una excepción distinta de todo lo conocido en la materia y derechos de gente. Estoy muy lejos de sostener teorías retrógradas, pero creo que tenemos el deber de velar por los grandes intereses del país que nos están confiados y que á aceptar la teoría nueva de la Inglaterra y Estados Unidos, países que están en distintas condiciones que el nuestro, es marchar en un mal camino; los hombres que después de cinco años están fuera de su país no son ciudadanos ingleses. Hoy están en pugna con los principios liberales, los intereses de la Inglaterra, porque la inmigración se desparrama por todas partes. Comprendo que allí hay utilidad en ese principio, pero entre nosotros de ninguna manera. Nosotros tenemos que conciliar antes que todo las disposiciones que establece la Constitución; pero no estoy dispuesto ni tengo el propósito de insistir más sobre esta materia.

**Sr. Oroño**—Hay ciertos principios, señor Presidente, que vienen constantemente en la historia de la humanidad abriéndose camino, y que aunque no estén escritos en todos los códigos están escritos en los códigos de los códigos: la libertad del hombre consagrada por la razón y la justicia.

Señor Presidente: el derecho que tiene el hombre á elegir su ciudadanía no ocupándose del nacimiento sino como un accidente que no puede servir de regla á sus acontecimientos ulteriores, en su vida y en el ejercicio de sus facultades de hombre,—nosotros, sin embargo, por una razón que todos comprenden, consagramos ese principio de la ciudadanía natural en nuestra Constitución. La República Argentina se encontraba en lucha entre una fracción representada por Buenos Aires y otra por las trece provincias. Buenos Aires necesitaba antes de todo, los hijos de extranjeros nacidos en su territorio para defender sus derechos, y fué esa oca-

sión en que prevaleció este principio y como resultado y terminación de la lucha que nos habia dividido se estableció en la Constitución, que la ciudadanía natural era el principio; pero no podía entenderse ni se entendió, que el argentino nacido en la República Argentina no podía hacerse ciudadano de otro país.

Si tal hubiera sido la mente de los legisladores, si así se entendiese la Constitución, resultaría una contradicción en la misma ley que dictamos, ley dictada especialmente á hacer ciudadanos argentinos á todos los extranjeros que residen aquí. ¿Por qué vamos á aplicar un principio, á obligar á los extranjeros á que se naturalicen en la República Argentina? Resultaría entonces que nos encontrábamos con ciudadanos que no servirían para soportar la carga de la ciudadanía y con un número de extranjeros superior á los hijos del país, que en un momento dado se transformaban en traidores y en servidores de su nación ó que solicitaban la protección de su nación.

No, señor Presidente; la Comisión al confeccionar este artículo ha querido ponerse en las condiciones únicas posibles y racionales. Ha dicho: todo argentino que se naturaliza en otra parte no tiene deberes para la nación sino cuando vuelva al territorio y quiera recuperarla. No habría un argentino tan cobarde que por el hecho de esta franquicia deje la patria de su nacimiento y se vuelva ciudadano de otra parte.

Deseo que el Senado se fije mucho en una de las observaciones que he hecho. Nosotros no podemos establecer principios completamente opuestos en esta ley, porque entonces sería de todo punto ilusoria. No podemos exigirle el compromiso y el deber de soportar las cargas en Francia una vez que sea francés, mientras que al francés se le desobliga completamente de ellas; porque entonces, repito, el resultado de la ley sería ilusorio y hasta perjudicial, porque una

vez sancionado ese principio, nos contrariaríamos con una porción de hombres en la República que no eran ciudadanos argentinos sino para las ventajas, porque en el momento preciso se volvían franceses. No es tampoco como el señor Senador ha dicho, sobre las razones que la Inglaterra ha tenido para su disposición. No es exacto que ella las haya dictado porque haya un número de ingleses que están demás en su nación, sino por principios más altos y elevados, de otro modo no los habría aceptado el pueblo inglés, porque si Inglaterra necesita desprenderse de sus hijos, los Estados Unidos que trabajan con mucho tesón por duplicar su población, no lo habrían aceptado. ¿Acaso no sabe todo el mundo que los Estados Unidos aun hoy mismo tienen constituidos agentes en los pueblos de Europa para promover la emigración? Ya ve pues, el señor Senador, como no son esas las razones que han militado para hacer ese tratado. Son principios más elevados; es el respeto á la ciudadanía natural. El derecho del hombre, en cualquier parte que estuviera debe tener la facultad de disponer de su individuo como lo entienda mejor.

**Sr. Piñero**—Este artículo que ha venido á substituir al título que se mandó reconsiderar en la sesión anterior, me ha sido presentado en el momento antes de entrar aquí. Creo yo que este artículo contiene más ó menos lo que contenía la sección que se mandó reconsiderar. Veo que el artículo habla de todos los ciudadanos argentinos, entre los cuales entran los naturales. Mi pensamiento nunca ha sido este, ni es la primera vez que lo digo. Yo creía que hablaba de los ciudadanos naturalizados y que sobre los otros guardábamos silencio, y este fué el primitivo pensamiento de la Comisión. Yo no profeso los principios que acaba de manifestar el señor Senador preopinante; no comprendo la libertad del hombre como él la comprende; esta propiedad de rom-



per todos los vínculos con la patria, con la familia, con la sociedad en que ha nacido; ese no es el hombre civilizado, esa es la libertad que se puede tener en la Pampa...

**Sr. Oroño**—Esa es la verdadera libertad.

**Sr. Piñero**—No, señor; la libertad del hombre civilizado es la que prescribe la Constitución. Pues qué! un hombre puede romper los vínculos de la familia, los de la patria, y hacer fuego contra ella en nombre de la libertad? No, señor; no comprendo así la libertad.

**Sr. Oroño**—Ya la ha de comprender, si profundiza un poco más el asunto.

**Sr. Piñero**—El silencio que habíamos hecho en esta ley, era con este objeto: aparecía una nueva idea entre Prusia, Inglaterra y Estados Unidos, y entonces era más prudente suspender todo procedimiento; pero como el artículo está concebido de tal manera que abraza á todos los ciudadanos, yo no he de votar por él. Pongamos solamente á los ciudadanos naturales y de origen, y entonces habremos hecho una cosa con el primitivo pensamiento que tenía el proyecto.

**Sr. Granel**—Yo creo que los propósitos de la Comisión son muy laudables; pero no creo que es ir á esos laudables propósitos que ella tiene en vista, queriendo sancionar en esta ley de ciudadanía todos los principios que ha aplicado la Inglaterra y que va desprendiéndose de su antigua tradición; quieren dar al ciudadano argentino el derecho de desprenderse totalmente del principio de la ciudadanía natural y de las obligaciones que esta ciudadanía, que la Constitución impone, debe pesar sobre él; quieren darle la libertad de ir contra la bandera de su país, pero no se fijan en algo que destruye completamente su propósito.

Si le dan este derecho al ciudadano argentino, es porque se lo imponen también al ciudadano extranjero que venga a naturalizarse en este país, y entonces

digo yo: una ley de ciudadanía que tiene el propósito de aumentar la población argentina, no debe contener una disposición de esta naturaleza. Por el contrario, yo digo: ¿Cuál es el ciudadano extranjero bastante cobarde, como dice mi honorable colega por Santa Fe, que pueda sentirse dispuesto á arrojarse sobre la bandera de su patria? Nosotros no tenemos el derecho de hacerlo, por razones muy obvias, inútil de repetir aquí.

Así es que creo que no servimos al propósito de aumentar los ciudadanos argentinos con los extranjeros que vienen á nuestro país. Yo no quiero tampoco llevar las cargas públicas de los ciudadanos argentinos fuera del terreno en que conviene llevarlas. No he dicho que quiero negar á los extranjeros el derecho de hacerse ciudadanos del país; lo que he dicho y sostengo es, que tenemos el deber de dictar una ley con el principio de la ciudadanía natural, porque así nos lo impone la Constitución. Como una consecuencia de este principio, es necesario salvar estos dos casos y si quiere ser lógica la Comisión, declare lo contrario de lo que propone: son ciudadanos argentinos los que quieran serlo, no digo del caso accidental de nacer en este territorio, que según las propias palabras del señor Senador, le impone el deber de ser ciudadano argentino. ¿Por qué no dice entonces?...

**Sr. Oroño**—Porque la Constitución se opone.

**Sr. Granel**—Entonces siga los preceptos de la Constitución; establezca lo que ella ha dicho y diga: el ciudadano natural argentino tiene el deber de respetar este principio y nosotros no podemos reconocer otra cosa; no insistiré más.

**Sr. Aráoz**—Pido la palabra, para contestar algunas de las observaciones hechas.

Empezaré por el señor Senador que deja la palabra. Se trata de impugnar el

artículo de la Comisión, bajo el punto de vista de que él es contrario al objeto que se propone la Constitución misma, de atraer el mayor número posible de ciudadanos.

Yo no entiendo así el artículo de la Comisión, señor Presidente, ni sé de qué manera lo ha entendido el señor Senador, cuando me parece que de ningún modo puede entenderse así.

¿Qué tiene que hacer esa disposición por la cual se exige de las cargas públicas, anexas á la ciudadanía, por ejemplo del servicio de la guardia nacional, que tiene que hacer eso con los derechos de ciudadano?

La excepción de estas cargas en favor de los ciudadanos nacidos en otro país, es precisamente de acuerdo con el objeto que la Constitución se propone, de ofrecer á esos ciudadanos ciertas ventajas para que permanezcan en este país. Tan es así, que la Constitución ha querido conceder estas franquicias, que el señor Senador se ha olvidado de otro artículo que hay en la Constitución, el cual dispone que los hijos de argentinos nacidos en otro país, pueden ser Presidentes de la República. Además, hay otro artículo que dice que los extranjeros que se naturalicen, quedan exceptuados por diez años del servicio de las armas.

Vea el señor Senador como la Constitución ha querido atraer á los ciudadanos de otros países, y á esto es á lo que responde el espíritu liberal, tanto de este artículo como de toda la ley.

El principio que sostiene el señor Senador responde á una idea diametralmente opuesta: puesto que quiere llevar la tirantez del principio de la ciudadanía aun más allá de lo que le ha llevado la Inglaterra. Y á este respecto debo observarle también al señor Senador, que la tendencia de la humanidad es el cosmopolitismo, tendencia progresista que adelanta cada día y que tiene por fin hacer de todo el mundo una patria común, es decir, que no haya más que

una sola patria y una sola clase de ciudadanos. A esta tendencia responde también esta ley, en cuanto damos franquicias y establece menos restricciones.

Debo decirle también al señor Senador, que he extrañado mucho oírle aseverar que la Inglaterra de ahora dos siglos era más liberal que en la actualidad; que la Inglaterra bajo el dominio de María Stuard era más progresista que bajo el dominio de la reina Victoria. Eso no se puede sostener, señor Presidente.

Repito, pues, que las observaciones que se han hecho, no están basadas ni en la Constitución ni en los principios que están adoptados por todo el mundo, porque el artículo primero ¿qué establece? Que la ciudadanía de origen se asimila á la ciudadanía natural, en todo conforme con la Constitución que dice, que los hijos de ciudadanos naturales nacidos en otro territorio que no sea la República Argentina, son ciudadanos argentinos.

Que dice que los hijos de ciudadanos naturales nacidos en Chile, en Inglaterra ó en Bolivia pueden ser Presidentes de la República.

Por no alargar más la discusión, no me extendiendo más á este respecto y pido que se vote.

—Dado el punto por suficientemente discutido, se votó el artículo y fué aprobado por trece votos contra diez; pasándose en seguida á discutir el artículo 13.

Acto continuo el señor Aráoz propuso á nombre de la Comisión la siguiente adición al proyecto, que debía entrar después del artículo 12 ya sancionado.

#### TÍTULO VII

##### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 13.—Los hijos de argentino nati-vo y los «extranjeros que estén actualmente en el ejercicio de la ciudadanía ar-

gentina, son considerados como ciudadanos naturales naturalizados, sin sujeción á ninguno de los requisitos establecidos por esta ley, debiendo únicamente inscribirse en el Registro cívico nacional.

**Sr. Aráoz**—Este artículo fué acordado con el señor Ministro del Interior que lo apoyó, no solo decididamente, sino con entusiasmo, porque lo cree de todo punto indispensable y de una justicia incuestionable. Como se ve, señor Presidente, este artículo comprende á cierto número de ciudadanos que se encuentran en casos excepcionales.

Hay muchos hijos de argentinos, muchos padres estaban expatriados, nacidos en la Banda Oriental, en Chile, en Bolivia y en otras naciones durante la tiranía de Rosas. Estos individuos no podrían aquí volver á ser ciudadanos sino se estableciera una disposición como la que contiene este artículo. Es por esto que se ha puesto este artículo para favorecer á los hijos de ciudadanos argentinos nacidos en la Banda Oriental, Chile, Bolivia, etc.

Aprobado el artículo 14 y siendo de forma el artículo 15, quedó terminada la ley en esta forma;

#### **Ley de ciudadanía**

*El Senado y Cámara de Diputados sancionan, etcétera.*

### **TÍTULO I**

#### **DE LOS ARGENTINOS**

**Artículo 1º**—Son argentinos:

- 1º Todos los individuos nacidos en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de los Ministros extranjeros y miembros de la Legación residentes en la República.
- 2º Los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero optan por la ciudadanía de origen.

3º Los nacidos en las Legaciones y buques de guerra de la República.

4º Los nacidos de padres argentinos en territorio extranjero, dominado por las armas de la República.

5º Los nacidos en las Repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la emancipación de aquellas y que hayan residido en el territorio de la Nación, manifestando su voluntad de serlo.

6º Los nacidos en mares neutros bajo el pabellón argentino.

### **TÍTULO II**

#### **DE LOS CIUDADANOS POR NATURALIZACIÓN**

**Art. 2º**—Son ciudadanos por naturalización:

- 1º Los extranjeros mayores de 18 años que residiesen en la República dos años, y manifestasen ante los Jueces Federales de Sección su voluntad de serlo.
- 2º Los extranjeros que acrediten ante dichos jueces haber prestado cualquiera que sea el tiempo de su residencia, alguno de los servicios siguientes: 1º Haber desempeñado con honradez empleos de la Nación ó de las provincias dentro ó fuera de la República. 2º Haber servido en el ejército ó en la escuadra, ó haber asistido á una función de guerra en defensa de la Nación. 3º Haber establecido en el país una nueva industria ó introducido una invención útil. 4º Ser empresario ó constructor de ferrocarriles en cualquiera de las provincias. 5º Hallarse formando parte de las colonias establecidas ó que en adelante se establecieran, ya sea en territorios Nacionales ó en los de las provincias, con tal que posean

en ellas una propiedad raíz. 6º Habitar ó poblar territorios nacionales en las líneas actuales de fronteras ó fuera de ellas. 7º Haberse casado con mujer argentina en cualquiera de las provincias. 8º Ejercer en ellas el profesorado en cualquiera de los ramos de la educación ó de la industria.

Art. 3º—El hijo de extranjero naturalizado que fuere menor de edad al tiempo de la naturalización de su padre y hubiese nacido en país extranjero, puede obtener del Juez Federal la carta de ciudadanía por el hecho de haberse enrolado en la Guardia Nacional en el tiempo que la ley dispone.

Art. 4º—El hijo de extranjero naturalizado, nacido en país extranjero, después de la naturalización de su padre, puede obtener la carta de ciudadanía, si viniendo á la República, se enrola en la Guardia Nacional á la edad que la ley ordena.

### TÍTULO III

#### PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA OBTENER LA CARTA DE CIUDADANIA

Art. 5º—Los hijos de argentinos nativos nacidos en el extranjero, que optaren por la ciudadanía de origen, deberán acreditar ante el Juez Federal respectivo su calidad de hijo de argentino.

Art. 6º—Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos anteriores, obtendrán la carta de naturalización, que les será otorgada por el Juez Federal de sección ante quien la hubiesen solicitado.

### TÍTULO IV

#### DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS ARGENTINOS

Art. 7º—Los argentinos que hubiesen alcanzado la edad de 18 años, gozan de los derechos políticos, conformes á la Constitución y á las leyes de la República.

Art. 8º—No podrán ejercerse en la Re-

pública los derechos políticos por los naturalizados en país extranjero, por los que hayan aceptado empleos ú honores de gobiernos extranjeros, sin permiso del Congreso; por los quebrados fraudulentos ni por los que tengan sobre sí sentencia condenatoria que imponga pena infamante ó de muerte.

Art. 9º—Solo el Congreso puede acordar rehabilitación á los que hubiesen perdido el ejercicio de la ciudadanía.

### TÍTULO V

#### DE LAS CARGAS DE LOS CIUDADANOS

Art. 10.—La pérdida de la ciudadanía argentina, por la adopción de otra extraña, exime de las cargas y deberes anexos á aquella.

### TÍTULO VI

#### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 11.—La carta de ciudadanía, así como las actuaciones para obtenerla, serán gratuitas.

Art. 12.—Por el Ministerio del Interior se remitirán á todos los juzgados de sección el suficiente número de ejemplares impresos de CARTAS DE CIUDADANIA, de modo que sean otorgadas bajo una misma fórmula.

### TÍTULO VII

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 13.—Los hijos de argentino nativo, y los extranjeros, que estén actualmente en el ejercicio de la ciudadanía argentina, son considerados como ciudadanos naturales ó naturalizados, sin sujeción á ninguno de los requisitos establecidos por esta ley, debiendo únicamente inscribirse en el Registro cívico nacional.

Art. 14.—Quedan revocadas todas las disposiciones en contrario á la presente ley.

Art. 15.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Aráoz**—Si le parece al señor Presidente, podemos pasar á cuarto intermedio, para considerar después otros asuntos.

—Se pasó á cuarto intermedio.

**Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, junio 2 de 1869.

*Al honorable Congreso de la Nación:*

El Congreso por la ley de 9 de oc-